



Hora: 10:10
Recibido el: 13 ENE 2022
Por: [Firma]

SECRETARÍA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TELEFONO 22718888, FAX 2281-0781

Firma: _____

ea
San Salvador, 6 de enero de 2022.

ASUNTO: Se comunica resolución de inconstitucionalidad
referencia 224-2016/225-2016/234-2016/235-2016

Respetable
Asamblea Legislativa
Presente.

Oficio No. 0050

Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se iniciaron procesos de inconstitucionalidad acumulados, de conformidad con el artículo 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales, clasificados con las referencias número 224-2016/225-2016/234-2016/235-2016 acumulados, por el requerimiento del Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, en el que declaró inaplicable el artículo 77 letra "g" de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, por la supuesta vulneración al artículo 3 inciso 1º de la Constitución.

En el citado proceso, la Sala de lo Constitucional emitió resolución a las trece horas con veinte minutos del 27/10/2021, la cual se remite íntegramente fotocopiada.

En dicha resolución, entre otros aspectos, se dispone lo siguiente:

1. *Sobreséese* el presente proceso acumulado, por la supuesta inconstitucionalidad del artículo 77 letra g de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, en relación con la vulneración del artículo 3 inciso 1º de la Constitución. La razón que justifica esta decisión es que la autoridad requirente no aportó los elementos mínimos para la adecuada configuración del examen de igualdad. (...)"

Lo que comunico para los efectos legales correspondientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

[Firma]
René Aristides González Benítez
Secretario de la Sala de lo Constitucional
Corte Suprema de Justicia



Inconstitucionalidad

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Agréganse los escritos presentados el 3 de marzo de marzo de 2017, por medio del cual la Asamblea Legislativa remite el informe que le fue requerido en los autos de inicio de estos procesos acumulados; y el 16 de marzo de 2017, por el que el Fiscal General de la República rindió la opinión que le fue requerida de acuerdo con el art. 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Los presentes procesos de inconstitucionalidad acumulados iniciaron de conformidad con el art. 77-F LPC, por el requerimiento del Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel¹, en el que declaró inaplicable el art. 77 letra g de la Ley General de Asociaciones Cooperativas² (LGAC), por la supuesta vulneración al art. 3 inc. 1° Cn.

I. Objeto de control.

“Art. 77.- Toda acción ejecutiva que las Cooperativas, Federaciones y Confederaciones, entablaren para la recuperación de obligaciones económicas a favor de éstas quedará sujeta a las leyes comunes con las modificaciones siguientes:

[...];

g) Se tiene por renunciado el domicilio del deudor y señalado el domicilio de la ejecutante, inclusive para diligencias de reconocimiento de obligaciones”.

II. Argumentos de la inaplicabilidad.

El juez requirente adujo que, con base en el art. 77 letra g LGAC, en los procesos ejecutivos mercantiles con referencia PE-145-2016/R4, PE-146-2016-R1, PE-153-2016/R1 y PE-152-2016/R4, recibió las demandas presentadas por la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Aprovechamiento La Guadalupana, de Responsabilidad Limitada. Así, para determinar si era competente en razón del territorio, verificó que el art. 77 letra g LGAC está vigente, pues no existe una derogatoria expresa de dicha disposición por el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) y porque la Ley General de Asociaciones Cooperativas es una ley especial.

En ese orden, explica que, en cada caso, procedió a enjuiciar la validez constitucional de la norma a aplicar. Al realizar el contraste normativo entre el art. 77 letra g LGAC y el art.

¹ Estos procesos acumulados dieron inicio de la siguiente forma: el 224-2016, por el oficio n° 1677, de 6 de diciembre de 2016; el 225-2016, por el oficio n° 1678, de 7 de diciembre de 2016; el 234-2016, por el oficio n° 1724, de 20 de diciembre de 2016; y, el 235-2016, por el oficio n° 1723, de 20 de diciembre de 2016; todos expedidos por el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mediante los cuales remitió las certificaciones de las resoluciones emitidas en esas mismas fechas, en los procesos con referencia PE-145-2016/R4, PE-146-2016-R1, PE-153-2016/R1 y PE-152-2016/R4, respectivamente.

² Aprobada mediante el Decreto Legislativo n° 339, de 6 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial n° 86, tomo 291, de 14 de mayo de 1986.

3 inc. 1° Cn., concluyó que dicha disposición legal era contraria al principio de igualdad, por lo que la inaplicó. Para justificarlo, señala que la disposición inaplicada estatuye que cuando las asociaciones cooperativas promuevan procesos ejecutivos, el juez competente será el del domicilio de estas. Por ello, un mismo criterio de competencia está regulado de forma distinta en la regla general establecida en el art. 33 inc. 1° CPCM y en la regla especial prevista en el art. 77 letra g LGAC. En consecuencia, considera que esta última disposición insta una prerrogativa a favor de las cooperativas que sean demandantes en procesos ejecutivos, en detrimento de cualquier otra persona natural o jurídica que sea parte actora en un proceso de este tipo, quien tendrá que plantear su demanda ante el juez del domicilio del demandado (salvo los supuestos excepcionales previstos en el Código Procesal Civil y Mercantil). En ese contexto, sostiene que el privilegio regulado en el art. 77 letra g LGAC no tiene justificación alguna, pues ambos tipos de sujetos normativos tienen las mismas características, en tanto que son demandantes en procesos de naturaleza ejecutiva.

En esa línea, según el juez requirente, la diferenciación entre los sujetos mencionados carece de justificación, porque no existe norma constitucional que directa o indirectamente exija el tratamiento diferenciado de las cooperativas cuando sean demandantes en los procesos ejecutivos. En cualquier caso, aunque se admitiera que la finalidad de la disposición fuera facilitar a las asociaciones cooperativas el acceso a los tribunales, la medida sería innecesaria, ya que el acceso a la protección jurisdiccional debe brindarse a todas las personas por igual y porque tal derecho no se determina por cuestiones territoriales, sino por otros factores como la simplicidad de los procesos judiciales, la diligencia y la independencia e imparcialidad de los jueces.

III. Orden temático de la resolución.

Para adoptar la decisión que corresponde en este caso, se seguirá el orden temático que sigue: (IV) se abordará lo relativo a la aplicación del sobreseimiento en el proceso de inconstitucionalidad y, posteriormente, se explicará (V) el contenido del principio de igualdad en la formulación y en la aplicación de la ley; (VI) el test de igualdad y su integración con el juicio de proporcionalidad; y finalmente, (VII) se aplicarán esas consideraciones a este caso.

IV. Sobreseimiento en el proceso de inconstitucionalidad.

En materia constitucional, el sobreseimiento implica la existencia de vicios en la pretensión —cualquiera que fuere su naturaleza— que impiden al juzgador pronunciarse sobre el fondo del asunto³. Dichos vicios la afectan y producen el rechazo de la demanda cuando son detectados en la tramitación del proceso constitucional⁴. Ello es así porque la pretensión es el elemento condicionante del proceso en todas sus etapas: es la que determina su iniciación, continuación y finalización⁵. Este Tribunal ha señalado que, según la Ley de Procedimientos Constitucionales, son varias las causas en virtud de las cuales puede sobreseerse en un proceso

³ Auto de 23 de enero de 2018, inconstitucionalidad 24-2016.

⁴ Sentencia de 8 de octubre de 2014, hábeas corpus 435-2014R.

⁵ Sentencia de 4 de junio de 2018, inconstitucionalidad 47-2015.

constitucional de amparo. Sin embargo, dicha ley guarda silencio para los casos en los que con idéntica razón se advierta cualquiera de tales causas —u otras análogas— en los procesos de inconstitucionalidad⁶. Por ello, esta Sala ha sostenido que la regulación del sobreseimiento en la citada ley —prevista inicialmente para el proceso de amparo— puede extenderse a los otros dos procesos de los cuales conoce, vía autointegración del Derecho⁷.

Por esa razón, en el proceso de inconstitucionalidad es procedente el sobreseimiento cuando se admitió indebidamente —independientemente de si el proceso inició por una demanda o por un requerimiento judicial—⁸. Esto significa que si en el transcurso del proceso se advierte que uno o varios de los puntos que fueron objeto de admisión no debieron haberlo sido, la decisión debe ser la de no continuar con su trámite y sobreseer⁹. De lo contrario, se incurriría en un dispendio de la actividad jurisdiccional, pues bajo la certeza de que la pretensión no es procedente, se haría que la relación procesal finalice con una sentencia desestimatoria —con lo que esto implica para las partes (informes y opiniones) y para este Tribunal—.

V. Sobre el principio de igualdad en la formulación y en la aplicación de la ley.

La igualdad es reconocida en el art. 3 inc. 1º Cn. como principio y como derecho fundamental. En el primer sentido, la igualdad es un mandato que supone una sujeción para todos los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, como una garantía de la legalidad y un imperativo de la justicia¹⁰. Así, el principio de igualdad constituye un criterio informador del sistema constitucional y del ordenamiento jurídico y debe, por tanto, ser observado en las actividades de aplicación, creación y ejecución del Derecho. En el segundo sentido, es la facultad que tienen las personas de exigir de los poderes públicos un trato equivalente al encontrarse en condiciones similares a otras personas¹¹, pero también a que deliberadamente se les dé un trato diferente en beneficio propio, al encontrarse en situación distinta a los demás individuos¹², bajo criterios justificables con base en la Constitución¹³. En ambas manifestaciones, la igualdad puede constituir un mandato de equiparación o un mandato de diferenciación.

La igualdad se manifiesta en el ámbito de la formulación de la ley y en su aplicación por los operadores jurídicos. En la formulación de la ley implica que el legislador, al configurar la norma, debe procurar que en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, se brinde a todas las personas el mismo trato, esto es, examinando si ha disciplinado de igual modo las situaciones y relaciones que sean iguales con independencia de los sujetos o

⁶ Auto de 1 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2014.

⁷ Así se ha dicho desde el auto de 2 de septiembre de 1998, inconstitucionalidad 12-98.

⁸ Sobre esto, ver el auto de 31 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 68-2013.

⁹ Auto de 19 de febrero de 2002, inconstitucionalidad 7-98.

¹⁰ Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.

¹¹ Sentencia de 7 de diciembre de 2010, amparo 174-2005.

¹² Sentencia de 3 de junio de 2011, amparo 206-2008 AC.

¹³ Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.

intereses personales que regule¹⁴ y, en caso de introducir diferencias, que determine su justificación teniendo en cuenta el contenido de la norma¹⁵. Por otro lado, la igualdad en la aplicación de la ley exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de manera que un órgano jurisdiccional o administrativo no pueda, en casos sustancialmente iguales, modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones o resoluciones, salvo cuando la modificación de sus precedentes posea una fundamentación suficiente y razonada¹⁶.

VI. De la integración del test de igualdad y el test de proporcionalidad.

1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se alega la infracción a principio de igualdad, el test de igualdad debe integrarse al de proporcionalidad¹⁷. Ello se justifica porque el test de proporcionalidad racionaliza la decisión de los problemas que involucran principios o normas que tienen la estructura de principios —como las de los derechos fundamentales— y por las semejanzas relevantes que existen entre ambos, lo que implica que un test integrado eliminaría una dualidad que hasta este momento ha sido innecesaria. Entre las semejanzas relevantes que justifican tal integración se pueden mencionar, entre otras, el análisis de la adecuación entre el medio empleado para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo —que en el test de proporcionalidad es el juicio de idoneidad y en el de igualdad es la determinación del fin que persigue la medida acusada de desigual—, el cotejo entre alternativas distintas y menos gravosas para la consecución de tal fin —que en el test de proporcionalidad es el juicio de necesidad y en el de igualdad es el análisis del término de comparación— y el hecho que ambos test tienen como presupuesto que se esté en presencia de una limitación, intervención o injerencia en el derecho respectivo¹⁸. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de igualdad —al igual que el de proporcionalidad— no opera con autonomía propia, de manera que una medida no puede violarlo directamente. La aplicación de este principio “requiere de un elemento adicional: el derecho fundamental o una situación jurídica afectada como consecuencia del trato diferenciador”¹⁹.

2. En ese sentido, solo se puede analizar la infracción a la proporcionalidad cuando se cuestione la constitucionalidad de una medida que interviene un derecho fundamental o un principio por vulneración a la proporcionalidad. En ese supuesto, este principio opera como un criterio estructural de carácter escalonado que sirve para determinar si una medida de intervención a derechos fundamentales está justificada o no por la Constitución. Posee dos variantes: la prohibición de exceso y la prohibición de protección deficiente²⁰.

¹⁴ Sentencia de 28 de mayo de 2014, inconstitucionalidad 146-2014 AC.

¹⁵ Auto de 30 de enero de 2015, inconstitucionalidad 119-2014.

¹⁶ Sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012 AC.

¹⁷ Auto de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 35-2018.

¹⁸ Inconstitucionalidad 35-2018, precitada.

¹⁹ Auto de 4 de octubre de 2019, inconstitucionalidad 136-2017.

²⁰ Reconocido por la jurisprudencia constitucional desde el año 2018. Véanse los autos de 10 de diciembre de 2018 y de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidades 23-2018 y 35-2018, por su orden.

VII. Análisis del requerimiento judicial.

El motivo de inconstitucionalidad alegado se centra en que la regla que estatuye el art. 77 letra g LGAC vulnera el principio de igualdad, ya que permite que las asociaciones cooperativas, federaciones y confederaciones promuevan procesos ejecutivos en su domicilio y no en el del demandado. Ello, porque el juez requirente considera que la diferenciación a favor de dichas entidades cooperativas no tiene fundamento en alguna norma constitucional que directa o indirectamente exija un tratamiento distinto para las cooperativas cuando sean demandantes en los procesos ejecutivos. E incluso, si se asumiera que la finalidad de la disposición fuera facilitar a las asociaciones cooperativas el acceso a los tribunales, la medida es innecesaria pues el acceso a la protección jurisdiccional debe brindarse a todas las personas por igual y porque tal derecho no se determina por cuestiones territoriales, sino por otros factores como la simplicidad de los procesos judiciales, la diligencia y la independencia e imparcialidad de los jueces en sus actuaciones.

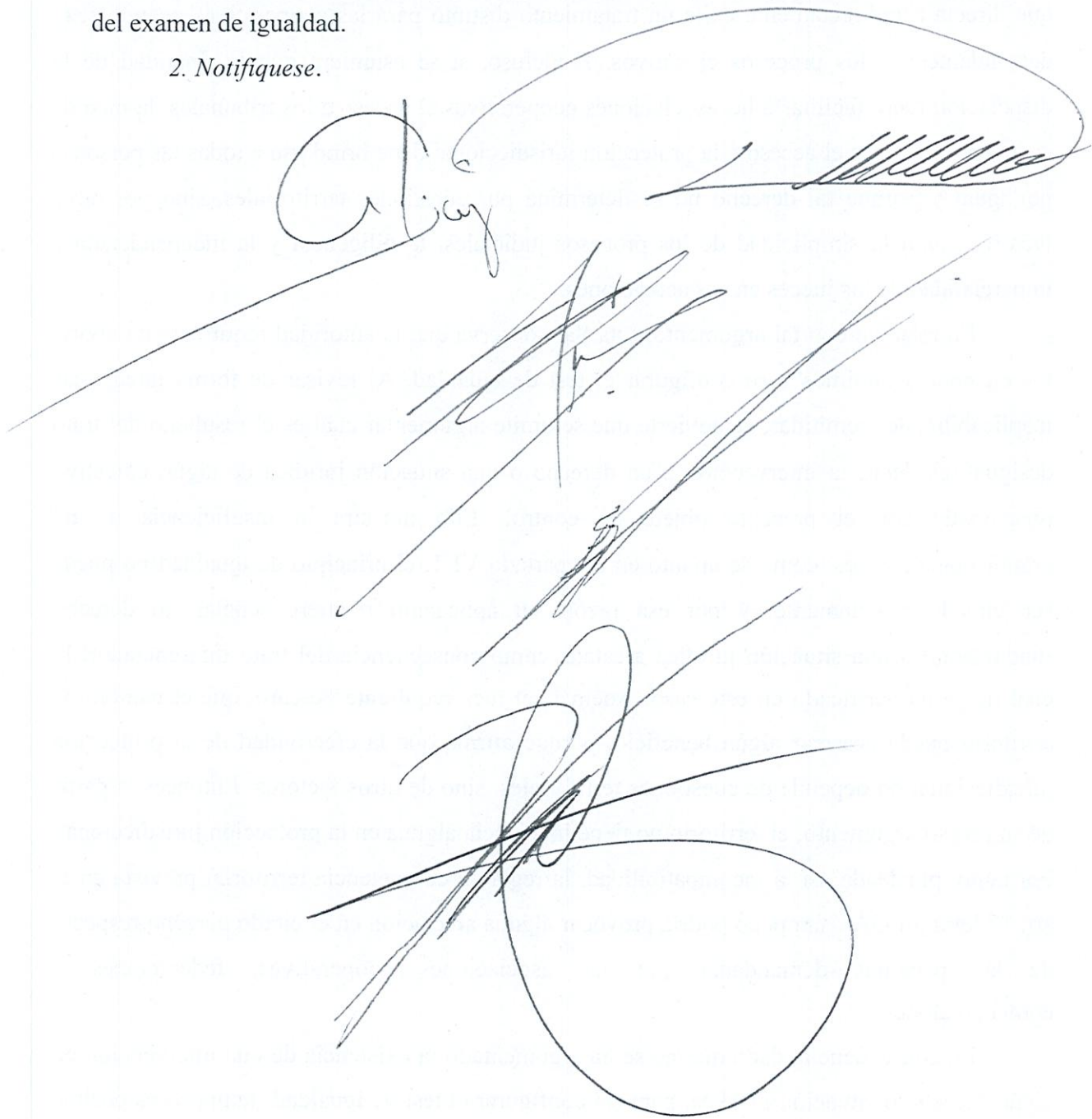
En relación con tal argumento, esta Sala observa que la autoridad requirente no aporta los elementos mínimos para configurar el test de igualdad. Al revisar de forma íntegra las inaplicabilidades remitidas, se advierte que se omite argumentar cuál es el resultado del trato desigual, es decir, la intervención a un derecho o una situación jurídica de algún colectivo relacionado con el precepto objeto de control. Ello muestra la insuficiencia de tal argumentación, pues, como se apuntó en el apartado VI 1, el principio de igualdad no puede ser violado directamente, y por esa razón, su aplicación requiere señalar un derecho fundamental o una situación jurídica afectada como consecuencia del trato diferenciador, lo cual no se ha verificado en este caso. Además, el juez requirente descarta que el cambio de territorio pueda acarrear algún beneficio, porque afirma que la efectividad de la protección jurisdiccional no depende de cuestiones territoriales, sino de otros factores. Entonces, a partir de su propio argumento, el territorio no tiene incidencia alguna en la protección jurisdiccional. Por tanto, planteada así la incompatibilidad, la regla de competencia territorial prevista en el art. 77 letra g LGAC tampoco podría provocar alguna afectación en el citado derecho respecto de las personas demandadas por las asociaciones cooperativas, federaciones y confederaciones.

En consecuencia, dado que no se ha argumentado la existencia de una intervención en algún derecho o situación jurídica, para así configurar el test de igualdad, tampoco es posible efectuar el test de proporcionalidad, pues, como se indicó en el punto VI 2, solo se puede analizar la infracción a la proporcionalidad cuando se cuestione la constitucionalidad de una medida que interviene un derecho fundamental o un principio por vulneración a la proporcionalidad. En ausencia de tal argumentación, es imposible realizar el análisis constitucional respectivo. Como se advierte, las alegaciones de la autoridad requirente son insuficientes para sostener la infracción al principio de igualdad (art. 3 Cn.). Por tanto, con base en estas consideraciones, *el presente proceso se deberá sobreseer.*


Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 31 número 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso acumulado, por la supuesta inconstitucionalidad del artículo 77 letra g de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, en relación con la vulneración del artículo 3 inciso 1° de la Constitución. La razón que justifica esta decisión es que la autoridad requirente no aportó los elementos mínimos para la adecuada configuración del examen de igualdad.

2. *Notifíquese*.

A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink. At the top left, the name 'Almey' is written in a cursive script. To its right is a large, horizontal scribble consisting of many overlapping, parallel lines. Below these are several other scribbles of varying complexity, including a large, circular scribble at the bottom center.

PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN

A single handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rafael'.